

CRÍMENES DE ESTADO

una política imperial

INSURRECCIÓN



ROSA ELENA ROMERO LOPEZ

ENRIQUE SANDOVAL HUERTAS

Sudán. En llamas

Signo de este tiempo. Fuerza para luchar

Mejorar la productividad. ¿Sin cambiar el modelo?

INSURRECCIÓN 1025

CARICATURA

03 Mano firme, impunidad grande
Magenta

EDITORIAL

04 40 años de impunidad, 4 niveles de verdad
Comando Central (COCE)

DECLARACIONES

08 ELN comprometido con la defensa de la vida y la soberanía
Comando Central (COCE)

DEBATES del CONFLICTO

10 El signo del tiempo
Antonio García, Primer Comandante del ELN

14 Doctrina victimaria
Damaris Izaguirre

SOLUCIÓN POLÍTICA

20 Colombia: holocausto y genocidio
Himelda Ascanio

REDES SOCIALES

24 La herida abierta del holocausto del Palacio de Justicia
Javier Mauricio Galvis Flores

ECONOMÍA

30 Cómo mitigar la pobreza multidimensional
Claudia Julieta Parra

34 ¿Se puede mejorar la productividad sin cambiar el modelo?
Chavela Villamil

CLEPTOCRACIA

38 Policía decrepita cumple 134 años
Sergio Torres

EL MUNDO

42 Sudán en llamas
Anaís Serrano

MANO FIRME, IMPUNIDAD GRANDE

Magenta



Insurrección #1025. 10-11-2025 / Revista semanal del Comando Central del ELN de Colombia
www.eln-voces.net / @vocescol64 [Instagram] / t.me/voces1964 [Telegram]

Portada. 'Estado criminal y victimario' / Ilustración de Dora I.

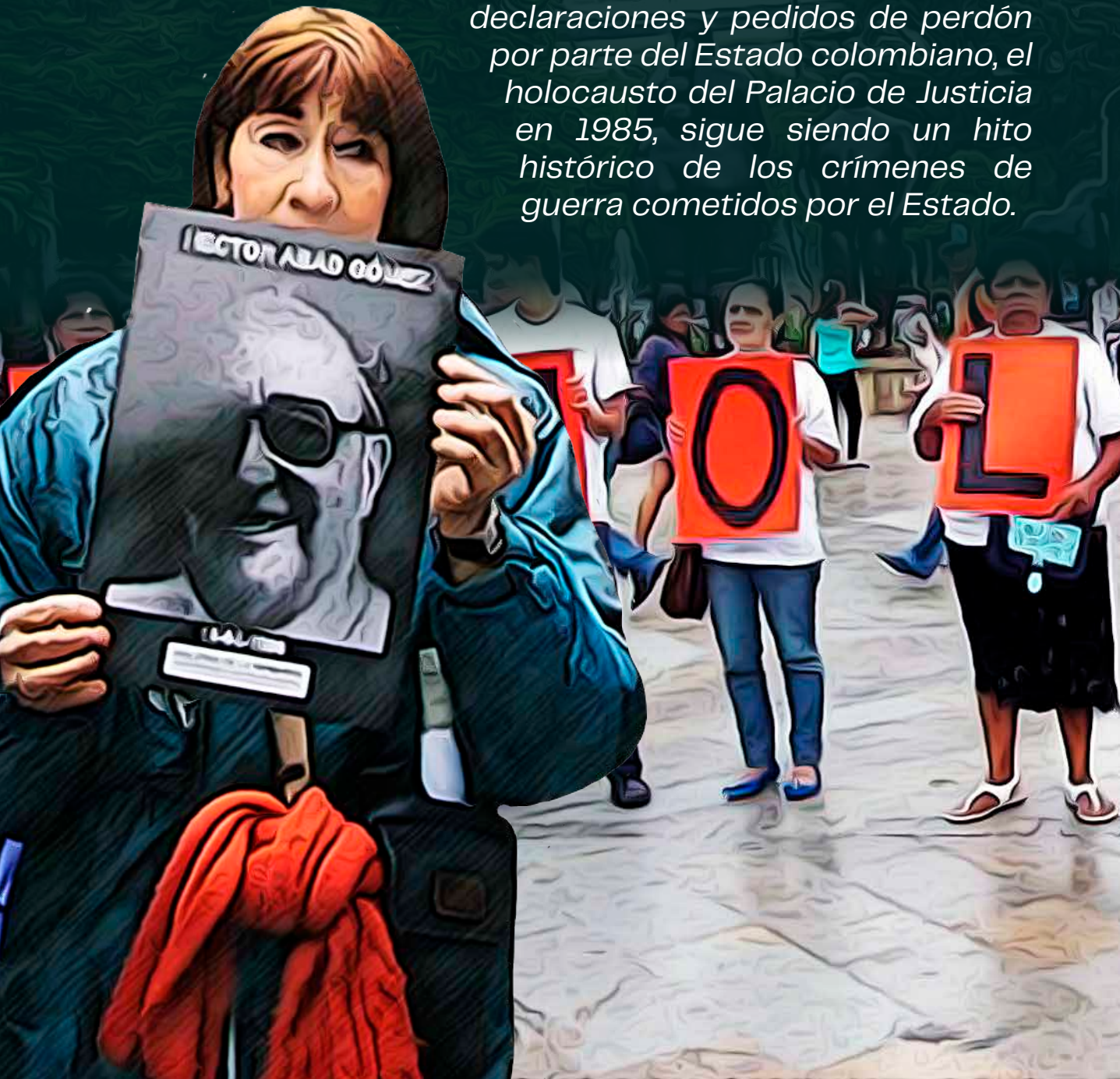
Contraportada. Ilustración de Dora I.



40 AÑOS DE IMPUNIDAD, 4 NIVELES DE VERDAD

Comando Central (COCE)

A pesar de los reconocimientos, declaraciones y pedidos de perdón por parte del Estado colombiano, el holocausto del Palacio de Justicia en 1985, sigue siendo un hito histórico de los crímenes de guerra cometidos por el Estado.



4 0 años después, todavía la élite gobernante impone una gran impunidad, tratando de esconder y negar aristas de aquella tragedia.

Para superar la impunidad, acercarse a una real verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por parte del Estado, así como extraer lecciones de una situación tan grave como la del Palacio de Justicia, hay que desenmarañar y evidenciar toda la verdad. Más allá de la farsa de los largos procesos de investigación y acusaciones por los crímenes de Estado, perpetrados por militares en la operación de retoma, hay otros elementos que hacen parte de esa verdad y que deben conocerse y revisarse.

Uno. Cuando la guerrilla del M-19 ejecutó la acción, en la que se tomaron las instalaciones del Palacio de Justicia, planteó una negociación. Es decir, se ejecutó una acción de presión, para plantear un escenario en el que se debatieran realidades y situaciones del contexto político de ese momento. Ya lo habían hecho años atrás con la acción de la Embajada de República Dominicana, pero contrario a lo acontecido en esa acción, en la toma del Palacio de Justicia el régimen negó la negociación, no optó por una salida negociada y respondió con el desarrollo de una operación militar desproporcionada, en la que buscó el aniquilamiento de todas las personas que estaban dentro del Palacio.

Dos. Como ha sido desde hace 8 décadas, la Doctrina de seguridad, la dirección y las órdenes a las Fuerzas Militares colombianas las da el gobierno de los Estados Unidos. Dicha obediencia y sumisión a los dictámenes norteamericanos, venían bien aceitados y adoctrinados desde el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982). Por lo cual, ante la situación generada en el Palacio, la decisión de los militares fue acatar las órdenes de EEUU y desconocer al presidente Betancur (1982-1986), que había ordenado detener la operación militar; por el contrario, la continuaron buscando el saldo que todos conocemos. En un escenario de búsqueda de verdad, lo hecho por los militares bajo el mando de los EEUU, fue dar un golpe militar contra un presidente civil.

Tres. La narrativa que el régimen ha querido imponer frente a los hechos del Palacio de Justicia, se ubica en la idea del exceso, de una “respuesta necesaria que se salió de control”, donde el principal culpable es el M-19, por haber generado la situación de una operación militar de aniquilamiento que se desbordó. Una narrativa falsa que esconde otros intereses que se priorizaron.

Cuatro. Los EEUU y la oligarquía colombiana aprovecharon las acciones del Palacio de Justicia para deshacerse, dar de baja, a los magistrados demócratas de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. Algunos de ellos fueron ejecutados dentro del Palacio, otros en las instalaciones de la inteligencia militar.

El magistrado, Alfonso Reyes Echandía, alertaba por tesis como esta: “Aunque en Latinoamérica, constitucional y políticamente el ejército tiene como misión defender la independencia y soberanía nacionales, a partir del triunfo de la Revolución cubana comenzó a abrirse paso la tesis de que el enemigo de la soberanía ya no provenía del exterior, sino que estaba arraigado en el interior del Estado”.



Por esto, EEUU y la oligarquía utilizaron y aprovecharon la toma del Palacio para resetear la justicia e impedir visiones demócratas dentro de esta rama del Estado, creando un remedo de justicia, que ha permitido y sostenido los mayores registros de impunidad y permitiendo que incluso los mayores criminales lleguen a ser presidentes.

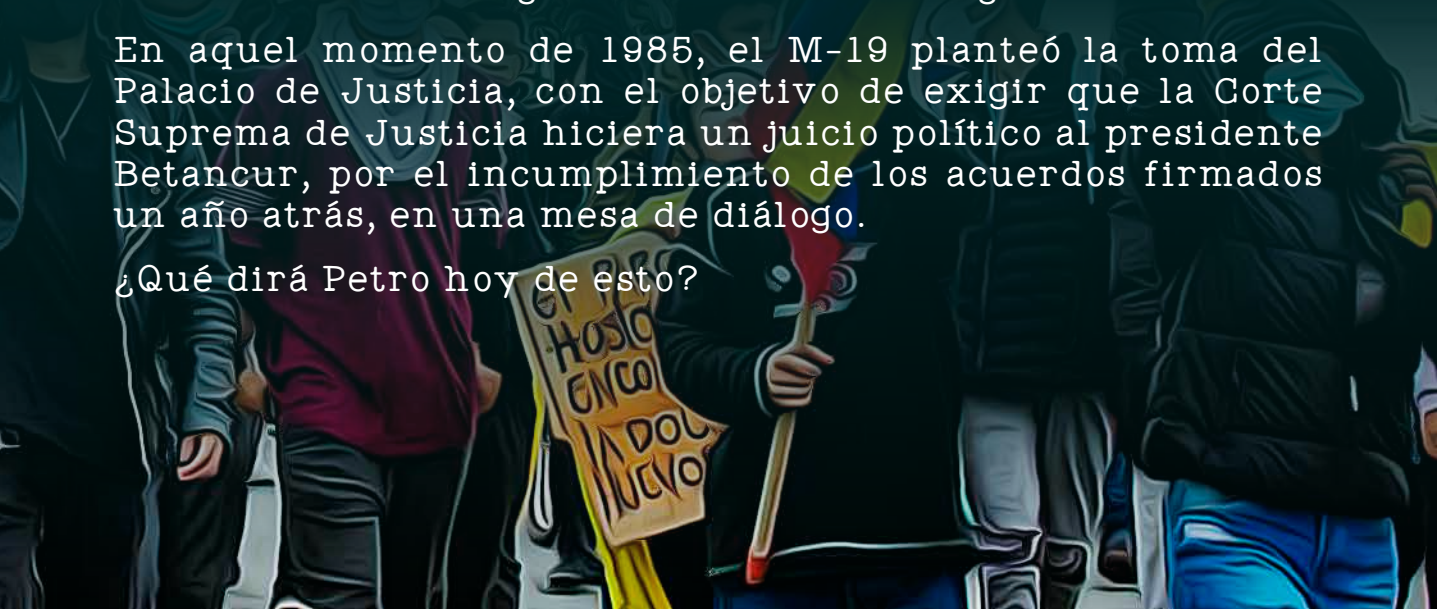
40 años después de estas acciones, algunas cosas han cambiado, pero la mayoría no. El régimen de costumbres genocidas y las imposiciones de los EEUU se mantienen, sosteniendo un narco Estado con unas Fuerzas Armadas mafiosas y paramilitares.

Aún siguen investigaciones en curso y algunos militares han sido condenados por los hechos del Palacio de Justicia. Sin embargo, aún están pendientes las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad, al asesinar, torturar y desaparecer civiles, entre ellos los magistrados de la Corte. Así mismo, está pendiente la asunción de responsabilidades por el golpe militar y quienes lo ordenaron. Y por los que desconocieron un escenario de negociación, porque ya tenían la orden de asesinar.

Con desfachatez, los extremistas de derecha hoy plantean escenarios de indulto a los militares, llamando al Perdón Total, como parte del silenciamiento y olvido de estos interrogantes aún sin resolver, por los cuales no solo se deben condenar a algunos militares de rango medio.

En aquel momento de 1985, el M-19 planteó la toma del Palacio de Justicia, con el objetivo de exigir que la Corte Suprema de Justicia hiciera un juicio político al presidente Betancur, por el incumplimiento de los acuerdos firmados un año atrás, en una mesa de diálogo.

¿Qué dirá Petro hoy de esto?



ELN COMPROMETIDO CON LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA SOBERANÍA



Comando Central (COCE)

Las acciones intervencionistas del Imperialismo Norteamericano en América Latina, como en otras regiones del planeta se caracterizan por la flagrante violación del Derecho Internacional, que ellos mismos dicen defender, y se contemplan en planes y propósitos para mantener la expoliación en el mundo y continuar imponiendo su hegemonía.



La actual agresión de la administración Trump contra el continente, sigue reafirmando la certeza profética, que hace más de 200 años, sentenció el Libertador Simón Bolívar: “Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria a nombre de la libertad”.

Viejos y nuevos imperios, a lo largo de la historia, han recurrido al uso de narrativas sustentadas en mentiras, para justificar violaciones a la soberanía de pueblos y naciones, y así, terminar arrasando comunidades a sangre y fuego, saqueando tierras y riquezas.

El despliegue militar gringo y el uso desproporcionado de la fuerza sobre el Caribe y el Pacífico, con el burdo montaje de combatir el narcotráfico, lanzando bombas y misiles contra embarcaciones, asesinando personas indefensas, está enfocado en intimidar y chantajear para imponer sus lógicas de saqueo.

La incertidumbre generada por las acciones intervencionistas reafirma la vigencia de la lucha antiimperialista, en defensa de la soberanía y la autodeterminación de pueblos y naciones, derechos con los que el ELN se siente identificado y por tanto comprometido en colocar sus modestos esfuerzos para apoyar su defensa.

Comprometidos con el presente y futuro del sur global invitamos a las y los patriotas y revolucionarios, a los sectores populares, democráticos y nacionalistas de nuestros países a encontrarnos y organizarnos en función de configurar una gran fuerza latinoamericana para rechazar las acciones inmorales impulsadas por Trump, con el fin de agredir la soberanía de Venezuela, Colombia y otros países, y seguir defendiendo la vida, la justicia, la paz, la soberanía y la independencia de nuestras naciones.

Para la defensa de la independencia y la Patria Grande, cuenten siempre con nosotros.

Comando Central

Ejército de Liberación Nacional

Montañas de Colombia

Noviembre 2025



EL SIGNO DEL TIEMPO



Antonio García, Primer Comandante del ELN

Se dice que el mundo puede ir de mal a peor, en ese sentido deberíamos preguntarnos: ¿Padecerán las mayorías que hoy habitan el planeta Tierra mayores vulneraciones de sus derechos fundamentales? ¿Vendrá más exclusión y más explotación?



Si nos guiamos por la información que a diario circula por los sistemas masivos de comunicación, así parece ser. Y si nos guiamos por la memoria de los pueblos, de sus luchas, nos queda la esperanza de que se levantará una barricada humana que impedirá que así sea.

Para la preocupación que despierta la información diaria, una pista: una jornada laboral de 13 horas diarias fue aprobada recientemente por el parlamento griego. La decisión, aplicable máximo 37 días al año y de “común acuerdo entre trabajador y empleador”, fue tomada pasado más de un siglo, desde cuando los trabajadores por medio de históricas huelgas y luchas directas, uniendo esfuerzos y sin permitir que el temor les venciera, superando arremetidas represivas que incluyeron incluso la muerte “legal” para algunos de ellos, para otros cárcel, para no pocos persecución, así como criminalización y difamación ampliada por los grandes periódicos de entonces, propiedad como hoy de los más ricos, lograron los históricos tres ochos, entre ellos la jornada laboral de 8 horas. Por más de un siglo el trabajo se extendía hasta 12, 14 o más horas al día. Ojo, no fue un derecho entregado por generosos capitalistas ni una cláusula más de leyes heredadas, costó mucha sangre y sacrificio de la clase obrera, y aún sigue costando.

Es precisamente ese logro, el que hoy intentan arrebatar. Abuso que sucede en medio de las constantes y potentes transformaciones que están procurando las transformaciones productivas, que experimenta el mundo de la mano de la informática, en especial por efecto de los llamados “sistemas inteligentes”, y en ello de la robótica, con lo cual puede reducirse a la mitad o menos la jornada de trabajo diario y, aun así, seguirían llenándose de dinero los bolsillos de los grandes magnates capitalistas.

Era inimaginable que este logro universal, luego de más de ciento treinta años, los más ricos del mundo pudieran arrebatárselo a los oprimidos, pese a ser un derecho consagrado en todas las constituciones del mundo, arremeten y avanzan en su propósito de explotar más y más, y de acumular más y más.





La “justicia” para ellos es un aviso colocado en lo alto de la puerta del infierno, en este caso, el infierno capitalista, y en el cual dice: “Bienvenidos, ¡Renuncia a toda utopía! ¡Aquí los derechos son sueños traducidos en pesadilla!”

¡Inimaginable lo que está sucediendo ante los ojos de toda la humanidad! Pero no es solo en Grecia, ni solo pretenden arrebatarse este derecho, otros varios están en la mira de quienes empujan con sus gobiernos y liderazgo mundial, la regresión a los tiempos más oscuros de la humanidad, cuando la esclavitud era norma diaria.

Lo vemos en Argentina, donde Milei, su presidente, motosierra en mano, la misma herramienta que usaban aquí los paramilitares, para arrebatarse la tierra y desplazar a millones, promete la felicidad a los argentinos cortándoles todos sus derechos. Pero en realidad, la felicidad va siendo la de los grandes capitalistas y la tristeza la de las mayorías, arrojados a la incertidumbre de ¡sálvese quien pueda!



Más cerca de nosotros, en Ecuador, pretenden recorrer igual camino, y en referendo citado para el mes de noviembre su Presidente Noboa busca el apoyo social para sacar vía Congreso reformas lesivas, en cuanto a la soberanía nacional y permitir de nuevo Bases Militares extranjeras. Al tiempo que en modalidad de Consulta Popular le pide al pueblo pronunciarse sobre si autoriza o no la citación a instalar una Asamblea Nacional Constituyente, por medio de la cual quedarán borrados los derechos más avanzados aprobados en la vigente Constitución de 2008, entre ellos los que tienen que ver con el mundo del trabajo, la naturaleza, y otros muchos.

Es una avanzada regresiva alimentada ideológicamente desde Estados Unidos, cabeza de este proceso reaccionario, sociedad en la cual el salario mínimo no existe, la seguridad social totalmente interrogada, los migrantes tienen que trabajar en medio de la mayor zozobra, ante el temor de ser deportados a su país de origen si son capturados. Desde allí, ahora se llama a desmantelar el Estado, pero no para que así disminuido quede en manos de la sociedad, sino para que en medio del reforzado aparato militar, queden abiertos todos los caminos, para que capitales globales inviertan con la garantía de ganar cada día más y más.

Como puede deducirse, desmantelan, cortan, niegan, lo que favorece al pueblo, y abren, aprueban, posibilitan, todo aquello que favorece a la clase que tiene sumida en el mayor estado de injusticia y desigualdad, a cientos de millones de seres humanos.

Y la gran paradoja, donde a pesar de la abundancia de alimentos y mercancías que produce la incansable máquina capitalista, siguen muriendo miles y miles de hambre.

Esta lógica de muerte no será modificada por los poderosos, menos podrá confiarse en leyes temporales, que al cambiar la correlación de fuerza vuelven a imponer la ley del más fuerte, que no es otra cosa que el poder de los explotadores. La única trinchera desde donde se logra resistir es la misma lucha, y así, quien tenga la fuerza para luchar logrará sobrevivir, pareciera ser el signo de este tiempo.



DOCTRINA VICTIMARIA



R González

Damaris Izaguirre

Cuatro décadas cumplen los reclamos de las familias de las víctimas del Palacio de Justicia, por los suplicios y violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por el Ejército durante la operación de retoma.



Las tropas estatales pisotearon su función constitucional y actuaron como mercenarios, que dispararon indiscriminadamente y con ímpetu de tierra arrasada, ¿su objetivo era que nadie saliera vivo?

El 6 de noviembre de 1985 un comando de la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) bajo el mando de Andrés Almarales y Luis Otero, en desarrollo de la operación 'Antonio Nariño por los Derechos del Hombre', se tomaron por asalto las instalaciones del Palacio de Justicia, bajo la premisa de obligar a la Corte Suprema de Justicia, a que le hiciera un juicio político al Presidente Belisario Betancur (1982-1986).

Dadas la connotaciones políticas e ideológicas de los grupos insurgentes de la época y el contexto de la década, es poco probable que el comando del M-19 planeara una 'operación suicida', por el contrario, lo más lógico es que su operación siguiera los patrones de la toma de la embajada de República Dominicana, es decir, una acción política con situación de rehenes, que culminaría con una negociación, que permitiera el repliegue a salvo del comando guerrillero y la exposición mediática de su objetivo político-juicio político al Presidente Betancur.

Durante el juicio al Coronel Plazas Vega, el comandante de la retoma, la fiscal Angela Buitrago afirmó, "durante la toma y retoma la función constitucional del Ejército era salvaguardar la vida y la integridad de los rehenes y demás civiles que se encontraban en el Palacio de Justicia, y conjurar la acción terrorista del M-19. No era permitido, ni es el deber ser del Ejército, desaparecer a las personas sin ni siquiera permitirles un acto de defensa, así fueran subversivos" [1].

El Ejército tenía sus propios planes, según dicen algunas fuente con base en cables secretos, conocían de los planes del M-19, sin embargo dejaron que discurriera la acción para





hacer una ‘operación de ratonera’, donde no saliera con vida ningún miembro de la guerrilla, sin importar el riesgo para los rehenes, ¿la retoma sangrienta fue un plan estratégico del Estado y ejecutado por el Ejército?

Helena Urán Bidegain -hija del Magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado por el Estado durante la retoma del Palacio de Justicia-, develó mensajes oficiales de la época, que pese a haber sido desclasificados hace más de una década, no se han tomado como evidencia en la investigación de este holocausto, donde se daba cuenta que el Ejército sabía de los planes del M-19: “existen planes para tomar un edificio gubernamental, fuerzas de seguridad fueron alertadas por fuentes de inteligencia hace más de una semana, que uno de los posibles blancos del M-19 es el Palacio de Justicia” [2].



Si el Gobierno conocía con antelación los planes del M-19 para ocupar el Palacio de Justicia, ¿por qué no reforzó la seguridad y vigilancia? Estos mensajes, refuerzan 'la teoría de la ratonera' que plantea que el plan del gobierno era permitir la toma para encerrar a los guerrilleros y responder automáticamente con la retoma.

La actitud del Ejército de abrir fuego de manera indiscriminada, poniendo en riesgo la vida de población no combatiente que estaba en calidad de rehenes, va en contra de sus manuales operacionales y es violatorio del DIH.

Recientes investigaciones denuncian que, "los militares llevaron a la Casa del Florero, a un grupo de cerca de 22 rehenes a los que denominaron 'especiales' -Magistrados, trabajadores de la cafería y guerrilleros-, por considerarlos como sospechosos, allí, fueron tratados como amenaza insurgente, enemigos de la nación, por eso, fueron torturados y en algunos casos asesinados y regresados al Palacio, para presentarlas como bajas durante el fuego cruzado, otras aún continúan desaparecidas" [3].

Al cumplirse 4 décadas de haber sido perpetrado el Holocausto del Palacio de Justicia las investigaciones no han sido efectivas, muchas víctimas siguen sin ser identificadas o desaparecidas; además la impunidad campea, aún no sale la verdad completa a la luz y muchos de los determinadores de esta masacre siguen libres y sin ser enjuiciados, el Expresidente Betancur se fue a la tumba sin haber respondido por estos crímenes y sin contar toda la verdad sobre los hechos.

Lo que es peor que la impunidad que ha rodeado este luctuoso hecho, es que la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por el Tío Sam e impartida en el país, desde hace más de 6 décadas, sigue sostenida por sucesivos Gobiernos, Doctrina que fundamenta la política del Enemigo Interno, la que convierte en objetivo militar y paramilitar a todo aquel



COLOMBIANOS LAS ARMAS
OS HAN DADO INDEPENDENCIA
LAS LEYES OS DARÁN LIBERTAD

BOGOTÁ 2014



que piense distinto o se atreva a ser una voz disonante; esta política no depende del Gobierno de turno, sino que emana directamente del Tío Sam, por tanto, mientras el régimen sea subordinado de los intereses del imperio norteamericano, continuará la política de exterminar excombatientes, líderes sociales y ambientales, y todo aquel que sea contrario a los intereses del régimen.

Una de las promesas de la campaña electoral del actual Gobierno, fue deponer la Doctrina de Seguridad Nacional y erigir un nuevo paradigma opuesto al Terror de Estado, como método para ahogar en sangre las exigencias de cambio del movimiento social y sostener el statu quo; promesa que apenas fue una ‘venta de humo’ y, que no puede ser cumplida mientras este Gobierno sostenga fracasadas alianzas con el régimen y este subordinado a los planes imperiales del Tío Sam.

Las víctimas no buscan ‘verdades a medias’ o convenientes para los determinadores de los crímenes, que se ocultan en las sombras, cobijados por la impunidad que históricamente les han brindado organismos como la Fiscalía; las víctimas exigen ‘verdad total’, justicia y no repetición; pero esto no vendrá de la mano de quienes ostentan el poder, esto solo será posible a través de la lucha popular organizada y decidida.

[1] Holocausto del Palacio de Justicia. History Channel, noviembre de 2022.

[2] Estados Unidos dio explosivos y participó en la retoma del Palacio de Justicia -Parte 1-. RTVC, 18-09-2023.

[3] Las huellas de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Señal Colombia, 6-11-2023.



COLOMBIA: HOLOCAUSTO Y GENOCIDIO



Himelda Ascanio

A propósito del holocausto del Palacio de Justicia ocurrido en 1985, cabe recordar que en Colombia también ocurre un genocidio continuado contra liderazgos sociales. La matanza de campesinos, indígenas, comunidades negras y pobladores urbanos, es otro holocausto, ambas matanzas muy dolorosas siguen en la impunidad.



La memoria no puede dejarse solo para algunos hechos, y siempre que se conmemore o recuerden hechos atroces cometidos por el Estado, hay que recordar que en Colombia hay un genocidio en curso, continuado desde hace décadas, que sigue cobrando víctimas en las organizaciones sociales.

Este genocidio es la resultante de una política con una estrategia paramilitar dictada desde Estados Unidos, acatada y aplicada al pie de la letra por el Estado colombiano. El establecimiento ha construido durante más de 50 años un complejo entramado mafioso y paramilitar, tomando como base la Doctrina de Seguridad del Enemigo Interno. Por la que, a pesar del paso del tiempo, continuaron aplicando la estigmatización, señalamiento y asesinato de todos aquellos procesos organizativos populares, que buscan la construcción de un país con vida digna para las mayorías.

Por ello, solo un gobierno sin un real poder y que, por el contrario, se estrella contra esos entramados, no puede generar cambios en las costumbres genocidas imperantes. Transformaciones que tendrían que impulsarse desde la organización popular y la movilización, y no desde las lógicas del propio Estado, mucho menos con acuerdos falaces y representantes del viejo régimen.

Hoy la realidad de las comunidades sigue siendo muy compleja. La estrategia de paramilitarismo ha continuado su implementación y se impulsa con saña desde la obediente oligarquía criolla. Los síntomas del declive del imperio estadounidense hacen que estas estrategias y políticas se apliquen con mayor desespero, intentando impulsar e instalar ideas fascistas en los territorios. Con lo cual, la Doctrina de Seguridad Nacional tiene un remozamiento, ya que mantiene su esencia de buscar enemigos dentro de las comunidades.





**NOS
SIGUEN
MATANDO**

El sostenimiento de estas estrategias desde el alto gobierno, no solo le sigue abriendo la puerta al exterminio y la impunidad, sino que perpetúa la guerra y niega las posibilidades de una salida política al conflicto. Con un genocidio en curso, es imposible construir lógicas y dinámicas de paz.

Un primer paso que debe darse, es justamente el reconocimiento de la existencia de un genocidio continuado contra líderes y lideresas sociales, la continuidad de una estrategia que busca eliminar a las todas las voces disidentes del pensamiento sumiso y entregado a intereses extranjeros. Desmontar el paramilitarismo, tanto en sus formas organizativas, mercenarias y operadoras de la guerra proxy, como en sus formas de pensamiento fascista impulsadas para normalizar y segregar.

Asesinados de la semana

Andrés Giraldo Velásquez, era un reconocido líder social y juvenil, además de servidor público de la Secretaría de Cultura y Medio Ambiente de la Alcaldía de El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia; fue asesinado el 8 de noviembre en un establecimiento público durante una masacre en la que hombres armados dispararon de manera indiscriminada, causando su muerte en el lugar junto con otras víctimas.



LA HERIDA ABIERTA DEL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA



Javier Mauricio Galvis Flores

En la masacre del Palacio de Justicia, durante la retoma por los militares torturaron y mataron magistrados, empleados y guerrilleros, desaparecieron personas y asesinaron civiles rescatados, para hacerlos pasar por víctimas del fuego cruzado: fueron cientos de falsos positivos.



24 REDES SOCIALES

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

No más Crímenes de Estado

Orlando Curioso @Orlando71156528

Fumiguen, fumiguen y no dejen entrar a la Cruz Roja", fue la orden del ejército asesino, que realizó la masacre del Palacio de Justicia. Fue un crimen de Estado y su autor intelectual, Belisario Betancur, murió impune. Cómo siempre.

Juan Camilo @JUANCAELBROKY

"Militares volaron un baño del Palacio de Justicia con 71 personas adentro". Crímenes de Estado que gozan de total impunidad y ahora don Uribe quiere que los militares responsables sean indultados. Así o más descarado.

Bandalos @BandalosSC

#LaCasaDeTorturas. Durante el #Holocausto del Palacio de Justicia, la Casa del #Florero fue un centro de torturas y asesinatos. Hoy quedan los gritos de los muertos y desaparecidos.

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE

40 años de impunidad en la matanza del Palacio de Justicia

DoñaPily @dona_pily2

El presidente de la Corte Suprema de Justicia @CorteSupremaJ, envía un mensaje claro, duro y contundente sobre el holocausto del Palacio de Justicia. Nada de romantizar lo que pasó, nada de maquillar, nada de falacias y mentiras.

César García @eljoodelsalmon

Hace 40 años sucedió la toma y retoma del Palacio de Justicia. Un suceso que aún hoy sigue en la impunidad, a pesar de conocerse gran parte de lo que ocurrió ese día.

* ¿Por qué el Ejército decidió reducir casi a cero la seguridad del Palacio de Justicia sabiendo desde hacía una semana que





el M-19 iba a hacer ese atentado? ¿Cómo llegaron los tanques de guerra en menos de una hora al Palacio si no sabían lo que iba a ocurrir?

- * El M-19 no pudo entrar un camión por el parqueadero y otro se le había varado varias cuadras atrás. Mejor dicho, además que eran menos de 40 guerrillerxs, muchas de sus armas no pudieron entrar. ¿Por qué hubo esa desproporción en armas y personas del Ejército?

- * Adentro empezó la carnicería. Cuando Alfonso Reyes Echandía, por recomendación de su hijo Yesid, llama a Yamid Amat para contar lo que estaba ocurriendo, el mismo Otero del M-19, pedía que hubiera un alto el fuego porque si no todos, incluidos ellos, iban a morir.

- * A Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Belisario Betancourt lo engañó.



Jamás le pasó al teléfono y jamás hubo el supuesto cese el fuego que cercanos al presidente le decían a Reyes que estaba a punto de ocurrir.

* Recientemente, Helena Uran Bidegain descubrió por unos documentos clasificados que EEUU envió por Panamá, armas para la retoma del Palacio. ¿Por qué lo hizo? ¿Sabrán que fueron esos detonantes los que provocaron el incendio al Palacio? ¿Cuál es su responsabilidad?

* Entraron tanques, cientos de militares, policías, civiles armados, helicópteros caían al techo, fusiles disparaban por todos lados, bombas estallaban en las puertas, todo sin pensar en los civiles y magistrados que estaban ahí. Fueron dos días de barbarie del Estado.

* Ha quedado demostrado en evidencia que el magistrado Carlos H. Urán, la guerrillera Irma Franco y otros civiles más, salieron del Palacio. Los llevaron al Museo Casa del Florero. Después los llevaron al Cantón Norte. ¿Por qué aparecieron muertos nuevamente en el Palacio?

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE

No más bombardeos indiscriminados de Trump en nuestros mares

Derli López @derlilopeza

Los mismos misiles que matan niños en Gaza hoy caen sobre jóvenes pobres en el Caribe. No son narcos, son empleados o pescadores. Casi 70 muertos, violando el derecho internacional. Son ejecuciones extrajudiciales.

Olga @olgarodriguezfr

EEUU no oculta sus ganas de invadir Venezuela para quedarse con el petróleo.

Esther Castro @BioSaura

EEUU es un hipócrita, bombardea lanchitas dizque porque tienen coca, pero deja entrar miles de avionetas cargadas de polvo blanco.





VIVA PALESTINA
LIBRE
DEL R'IO AL MAR
PST

MARTES 4 DE NOVIEMBRE

Uribe y paramilitarismo son lo mismo

Javier @JavierAdaime

El paramilitarismo está vivo y mientras tenga impunidad, será una amenaza.

De Perogrullo @OjoMudo

Yo veo a Uribe defendiéndose de los Falsos Positivos, y se me hace ver a Pablo Escobar diciendo que él no era Narcotraficante, sino ganadero.

Mapiaguilars @mapias15

La política de seguridad democrática de Álvaro Uribe fue Nefasta. Fue darle vía libre al paramilitarismo.

LUNES 3 DE NOVIEMBRE

Defendamos a Palestina

Lostinpit @Lostinpit1

Israel nos dijo que en Gaza sólo existen "seres de la oscuridad" y "bestias humanas", una burda excusa para cometer sus crímenes.

Carlos Caicedo @carlosecaicedo

Mientras hablan de invadir Nigeria “para proteger la vida de los cristianos”, callan y apoyan el genocidio en Gaza. En pleno “cese al fuego”, Israel arrasa barrios y asesina niños. La paz no se firma en papeles, se demuestra con hechos.

Laura @Secretosky_

Israel y EEUU no buscan la paz, quieren que el mundo le dé la espalda a palestina para terminar de destruirla y quedarse con sus riquezas.



CÓMO MITIGAR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL



N Angarita

Claudia Julieta Pavra

El modelo económico se centra en la monopolización del capital en un grupo plutocrático minoritario; esta situación intrínseca del modelo se ha recrudecido con la crisis económica, haciendo insostenible la situación socioeconómica de las capas sociales medias y bajas.



La desaceleración del mercado global ha generado un déficit de Costo de Vida que ha exacerbado la desigualdad, incrementando los índices de pobreza multidimensional y monetaria. Según la OXFAM el 1 por ciento de los más ricos ha acaparado casi dos tercios de la nueva riqueza generada en los últimos dos años, casi el doble que el 99 por ciento restante de la humanidad; la fortuna de los multimillonarios aumenta en 2.830 millones de dólares cada día, mientras que los salarios de al menos 1.700 millones de trabajadoras y trabajadores decrece respecto a la media incremental de la inflación, además la pobreza global ha crecido en un 12,3 por ciento.

En Colombia la desigualdad sigue la misma línea global, en el último año y pese a la Recesión Técnica existente, las fortunas de los grandes millonarios se han incrementado en un 19,5 por ciento, siendo la Banca la más beneficiada en gran medida por el favorecimiento que le brinda el incremento de las Tasas de Interés y de la Tasa de Usura; mientras el poder adquisitivo per cápita ha disminuido en 27,9 por ciento y según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en febrero la Pobreza Multidimensional a nivel nacional fue de 12,4 por ciento, en las cabeceras municipales fue de 8,32 por ciento y a nivel rural fue de 25,12 por ciento; índices que acentúan la crisis económica y desde luego decrecientan el desarrollo integral del país; actualmente existen 19,3 millones de habitantes en la pobreza y 6,9 millones en pobreza extrema.





Clementina

@vocescol64

@Voces_Col1964



Sucesivos gobiernos han tratado de subsanar la brecha de desigualdad y mitigar los índices de pobreza, pero se han limitado a atacar las causas a través de subsidios que resultan ser deficitarios y no resuelven ni siquiera medianamente los problemas estructurales, que hacen que la pobreza prolifere y se agudice. El abandono estatal en términos de infraestructura conlleva el incremento de la pobreza multidimensional, pero la pobreza monetaria principalmente está incidida por el bajo poder adquisitivo per cápita, que a su vez está determinado por la falta de empleo formal, y la sobre proliferación del subempleo, que genera una burbuja inflacionaria que relativiza la contracción económica, pero que no incrementa el poder adquisitivo y desde luego no da lugar a suplir ni siquiera los gastos básicos.

La marcada contracción de la economía requiere que el Gobierno trace un plan de emergencia, que en plazo inmediato debe centrarse en la disminución del Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de Deuda Externa) y el incremento del recaudo con función redistributiva y centrándolo en la captación por volumen de capital neto, lo que quiere decir, que debe implementar la tributación de los grandes capitales y empresas con un enfoque redistributivo, no priorizando la inversión y la rentabilidad y congelando la media incremental del pago de pasivos onerosos como es el caso de la Deuda Externa. La reactivación y la solidez implica un cambio de modelo económico o por lo menos un cambio en la política económica y fiscal, priorizando suplir el mercado interno a través del fortalecimiento de la industria y la producción nacional, además de desarrollar planes secuenciales que dinamicen el poder adquisitivo per cápita y decrezcan el costo de los servicios básicos y esenciales.



¿SE PUEDE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD SIN CAMBIAR EL MODELO?



R Morales

Chavela Villamil

No se puede negar que nuestra economía ha venido creciendo desde el periodo pandémico, sin embargo, este crecimiento está desacelerado y no solo afecta el Producto Interno Bruto (PIB), sino que, además, incrementa el déficit de costo de vida y pauperiza las capas sociales más bajas.



Durante el 2023 nuestra economía creció solo 0,6 por ciento, durante el año anterior creció 1,7 por ciento y este año las expectativas de crecimiento no superan el 2,5 por ciento. Reciente la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), redujo las expectativas de crecimiento de nuestra economía, según esta, crecerá 2,5 por ciento en 2025 y un 2,6 por ciento en 2026, cifras que marcan una disminución respecto a pronósticos anteriores.

El déficit fiscal, que alcanzó el 6,8 por ciento en relación al PIB en 2024, se mantendrá elevado en los próximos años, con el 6 por ciento proyectado para 2025 y un 5,6 por ciento en 2026. Según la OCDE, “a menos que haya evidencia de que la recaudación tributaria supere significativamente su nivel actual, serán necesarios recortes de gasto de al menos el 0,9 por ciento del PIB para cumplir con la regla fiscal” [*]; esto obliga a establecer una reforma tributaria integral, que respalde el orden fiscal y que su recaudo no se destine exclusivamente al Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de Deuda Externa), sino que se destine a inversión estatal integral y reinversión en la producción nacional.

La baja productividad y la baja capacidad de compra de los sectores socioeconómicos medios, medio-bajos y bajos, incrementan la deceleración económica existente y hace más difícil la posibilidad de una recuperación económica, por lo tanto, el país está lejos de alcanzar un punto de equilibrio a largo plazo.

El incremento en las ventas que reflejan algunos sectores de la economía, se percibe en los datos, como un leve aumento de la parte comercial y de las utilidades, pero esto, no se refleja en aspectos como la recuperación del empleo ni en la formalización del trabajo informal, solo repercute en el repunte de las utilidades de las grandes empresas y las corporaciones.





K González

Nuestras políticas económicas continúan y perpetúan la fracasada teoría neoliberal del Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), ligando la productividad, el desarrollo y el empleo al favorecimiento fiscal y tributario de las grandes empresas, bajo el supuesto de que estas luego gotearan la riqueza acumulada hacia las capas bajas de la sociedad; sin embargo, han pasado tres décadas continuas de su aplicación, y el resultado es el empeoramiento de la desigualdad y la pobreza monetaria y multidimensional, mientras crecen desmesuradamente las utilidades del sector plutocrático minoritario, de los grandes monopolios y capitales.



Debemos transformar el paradigma económico

La desaceleración económica, la Recesión Técnica declarada por el Banco de la República, la inflación, el incremento constante de la Deuda Externa (DE), entre otros, exige una política de austeridad que permita mitigar estos fenómenos; es inaplazable un cambio de fondo en el modelo económico, que disminuya los pasivos estatales, fortalezca y desarrolle integralmente la producción nacional y equilibre la balanza comercial, disminuyendo la importación de materias primas y productos con valor agregado.

Uno de los principales problemas de nuestro país es que tenemos una política económica, que centra sus esfuerzos en sostener el pago continuado de la DE, que además de ser onerosa es constantemente sobregirada, convirtiéndola en un pasivo incremental, donde los pagos solo amortizan los intereses, pero la deuda de capital continúa intacta.

El Gobierno tiene el deber y el reto de dinamizar la economía, lo que tiene implícito la disminución del Gasto Corriente y en sí misma un cambio de política económica y la construcción de un nuevo paradigma económico, que se centren en medidas que incrementen el poder adquisitivo per cápita, que solo es posible en la medida en que opere una política de formalización y estabilidad laboral, que permita a las capas sociales medias y bajas sufragar sus gastos básicos.

Superar la actual crisis económica y el déficit de poder adquisitivo, implica instaurar una política económica fundada en la formalización del empleo y la mejoría de las condiciones salariales, además debe generar una tributación redistributiva que permita subsidiar capas bajas de la sociedad, el sistema actual no genera ni inclusión social ni sostenibilidad ni mucho menos crecimiento y productividad, por tanto, se requiere un modelo que fomente el desarrollo integral de la producción nacional, y que a su vez disminuya el Gasto Corriente e incremente de manera integral el Gasto Social.

[*] La Oede recortó la expectativa de crecimiento para Colombia en 2025 y advirtió sobre persistente déficit fiscal. Forbes, 03-11-2025.

POLICÍA DECRÉPITA CUMPLE 134 AÑOS



Sergio Torres

La Policía de Colombia creada el 5 de noviembre de 1891, ataca al pueblo, a quien debe servir, celebra su cumpleaños sin las transformaciones profundas que urgen en su composición, visión y doctrina; decrepitud evidente, así pretendan maquillarla.



En lo que respecta a la policía, este gobierno cayó en uno de los mayores incumplimientos sobre lo que prometido en la campaña electoral, porque mantuvo inalterada la directriz del régimen de sostenerla, como un cuerpo militarizado, bajo el mando del Ministerio de Defensa. Contraviniendo lo que ordena La Constitución política de Colombia, en su artículo 218:

“La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Nada más lejos de la realidad. Por el contrario, la lógica y actuación policial funcionan de manera inversa a ese artículo: mantiene su naturaleza militar, vulnera derechos, restringe libertades ciudadanas y participa de la guerra interna, mediante alianzas con bandas y fuerzas extranjeras.

Trato de guerra a la protesta social

La brutalidad, el trato de guerra y el uso de fuerza letal por parte de la policía durante el Estallido Social de 2021, no solo cobró la vida de más de 150 personas, dejó heridas a más de 4.000 e infligió violencia sexual y basada en género a más de 100 mujeres y comunidad LGTBIQ+. Dicho antecedente fue recogido como bandera hacia cambios y transformaciones del nuevo gobierno, hoy convertido en uno de sus más grandes incumplimientos.

La respuesta a las exigencias desde los sectores populares y las denuncias publicadas por organizaciones de derechos humanos, como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), plantearon como una “decisión tomada” el traslado de la policía del Ministerio de Defensa al del Interior. En agosto de 2022, recién instalado el gobierno de Petro, ese era el discurso expresado por el propio ministro de defensa, Iván Velázquez.





En febrero de 2023, dicho traslado, ya no al Mindefensa, sino al Ministerio de Justicia, se planteó como un debate que avanzaba. El Ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaraba que: “hay que introducir algunas reformas de modernización de la Policía y una de ellas tiene que ver con desmilitarizarla, si me permiten la palabra”.

Para julio de 2023, las expectativas fueron borradas, se consumó el incumplimiento y el desconocimiento de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, se ignoraron los planteamientos de la Mesa por la Reforma Policial integrada por estas organizaciones. La confirmación y decreto del cambio de nombre del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) al de Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), fue, al igual que el cambio de color del uniforme, una burla a las exigencias de transformaciones en dicha fuerza.



En 2024, se establecieron supuestas directrices para “el uso de armas menos letales”. Con lo que siguió la ruta del maquillaje operativo, no de las transformaciones estructurales. De hecho, siguen las denuncias y evidencias de la continuidad de la brutalidad policial.

La corrupción policial, de mal en peor

Crecen los casos de la vinculación de miembros de la policía en entramados de corrupción, narcotráfico y paramilitarismo, que incluye al alto mando de esta institución. Bastaría con recordar nombres de anteriores jefes de la policía, como el general Rodolfo Palomino, condenado por proteger e impedir la captura del paramilitar Luis Gonzalo Gallo. O, más recientemente, el general William Salamanca, investigado por la relación y mantenimiento de la red de tráfico y contrabando al interior de la policía, en el caso del llamado “papá pitufo”.

En conclusión, el Estado colombiano mantiene su política y estrategia militarista. Que el gobierno Petro deslizó como una democracia militarizada. Con lo cual se mantienen las estructuras y doctrinas del modelo político colombiano, sostén de la desigualdad, la exclusión y la guerra.

Le quisieron achacar al conflicto social, político, económico y armado la imposibilidad de hacer los cambios profundos, pero esa es la excusa de quien se niega a revisar las causas que generan dicho conflicto y, por el contrario, asume la orden de mantener el narco estado y sus instituciones. Entre ellas, una policía al servicio de una oligarquía mafiosa que defiende al interior del país los intereses de la plutocracia que manda en Estados Unidos.



SUDÁN EN LLAMAS



Anaís Serrano

La guerra civil que desangra a Sudán desde abril de 2023 es, en la superficie, un conflicto entre dos facciones militares rivales: el Ejército Nacional de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), un grupo paramilitar nacido de las milicias Yanyauid.



Sin embargo, una mirada superficial oculta la esencia del conflicto: una lucha depredadora por el control de los recursos y el excedente económico de una nación, orquestada en el tablero más amplio de una reconfiguración del imperialismo contemporáneo. Un análisis serio no puede ver esto como una simple disputa tribal o política, como pretende mostrarlo occidente; es la expresión violenta del capital financiero y extractivista.

La Base del Conflicto: Más Allá de la Rivalidad Personal

La aparente rivalidad entre los generales Burhan (SAF) y Dagalo (RSF) es la narrativa de una base profundamente conflictiva. Tras la caída del régimen de Omar al-Bashir en 2019, el frágil gobierno de transición no logró dismantelar la estructura económica que sostenía al viejo régimen: una economía de rapiña basada en el control de recursos naturales (oro, petróleo, tierras raras), rutas comerciales y flujos migratorios.

Las RSF, lejos de ser un mero grupo militar, se convirtieron bajo Dagalo en un conglomerado capitalista parasestatal, es decir, paramilitar.

Controlan minas, operan de facto puertos y fronteras, y extorsionan el comercio y la migración. Su poder no emana de una ideología, sino de su capacidad de utilizar la violencia para acumular capital. El SAF, por su parte, representa los remanentes del aparato estatal burgués tradicional, con sus vínculos con la industria y los contratos estatales.

La guerra no es ideológica, sino una disputa de dos facciones de la clase dominante sudanesa, ambas profundamente integradas en el capital global, que luchan por el supuesto derecho a explotar el país y a ser el socio privilegiado de los capitales extranjeros...





El Papel de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF): El Capitalismo Mercenario

Las RSF ejecutan en Sudán la misma práctica que cualquier ejército paramilitar para la acumulación por desposesión. No producen mercancías; extraen riqueza mediante la coerción directa.

Su modelo de negocio es simple: controlar un recurso o un territorio mediante la violencia y vender el acceso a él al mejor postor internacional. En Sudán, el mejor comprador ha sido principalmente Emiratos Árabes Unidos (EAU) y, en menor medida, Arabia Saudita.



Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita

La intervención de EAU es crucial y debe entenderse desde la lógica del capital financiero y la seguridad energética. EAU, busca diversificar su economía e influencia geopolítica. Su apoyo a las RSF es multifacético:

Control del Oro: Las RSF son el principal canal de contrabando de oro sudanés hacia Dubái, un nodo central del mercado global del preciado metal. Este flujo ilegal lava miles de millones de dólares, financiando a las RSF y proporcionando a EAU un recurso estratégico y liquidez. Es una relación simbiótica perfecta: el capital emiratí financia la violencia que le garantiza el acceso al recurso.

Interés Geopolítico: EAU y Arabia Saudita ven el Cuerno de África como su patio trasero estratégico. Un Sudán estable y controlado por el SAF podría girar hacia rivales como Turquía o Qatar. Un Sudán fracturado, donde su facción títere (las RSF) controle los recursos clave, les otorga un mayor poder de veto sobre la política sudanesa. El proyecto es crear un "estado fallido funcional", donde la soberanía sea reemplazada por concesiones comerciales y militares privadas.

Emiratos Arabes Unidos ha venido asumiendo el caracter de nuevo factor del avance imperialista en la region, en 2011 intervino en el conflicto en Siria, en 2015 participó junto Arabia Saudita en la guerra contra Yemen y apoyó a una de las facciones (Ejercito Nacional Libio) en la guerra que se desató en Libia luego del asesinato de Gadaffi.

Por otra parte, la reciente avanzada de los mercenarios del RSF, coincide con la revelación de documentos presentados en la ONU, que muestran que parte del equipamiento militar británico que habia sido entregado a EAU, estaba en poder de ese grupo.





El Rol de Estados Unidos: Entre la Hipocresía y la Realpolitik Imperial

La postura de Estados Unidos ha sido ambivalente, lo que refleja las contradicciones internas del imperialismo estadounidense. Por un lado, denuncia atrocidades e impulsa treguas frágiles. Por otro, su política real ha sido de no intervención activa y complicidad tácita.

¿Por qué? Primero, porque una intervención directa sería costosa e impopular. Segundo, y más importante, porque sus aliados estratégicos en la región (EAU y Arabia Saudita) están profundamente involucrados en apoyar a una de las facciones. Presionar seriamente a EAU para que corte el financiamiento a las RSF, socavaría una alianza clave en su confrontación con Irán y en la seguridad energética global.



Estados Unidos prioriza la "estabilidad" en un sentido amplio —que significa el flujo sin obstáculos del capital y la contención de influencias rivales como Rusia, (quien ha avanzado en la region en apoyo a diferentes gobiernos), sobre la autodeterminación del pueblo sudanés. Su enfoque es gestionar el conflicto, no resolverlo, para evitar un vacío de poder que pudiera ser llenado por actores “abiertamente hostiles” desde la óptica de Washington. En la práctica, esta gestión beneficia el statu quo de saqueo y le provee, de manera directa al mercado norteamericano, el suministro de minerales críticos para semiconductores y tecnologías de defensa, con lo cual asegura la creciente economía de criptomonedas y la inversión inmobiliaria, que controla Trump.

El Sionismo como actor colonial

El ente sionista ha normalizado relaciones con Sudán (bajo el gobierno de Burhan) como parte de los Acuerdos de Abraham, buscando aislar diplomáticamente a Irán y ganar influencia en el Mar Rojo.

Segun los informes que han salido a la luz pública, el ente sionista ha utilizado la crisis en Sudán para justificar su expansión militar en el Mar Rojo bajo el pretexto de “proteger las rutas marítimas globales de las amenazas hutíes” y del mismo modo, profundizar su influencia en Etiopía y Eritrea como parte de un plan más amplio para contener la influencia iraní.

El Pueblo Ahogado en Sangre

El problema estructural radica en que múltiples actores (EAU, Arabia Saudita, Israel y USA) compiten por recursos y colaboran para subordinar a Sudán a sus intereses geoestratégicos y económicos.





El pueblo sudanés es la principal víctima de esta guerra “proxy” del capital. La clase trabajadora, los campesinos que impulsaron la revolución de 2019 han visto sus aspiraciones de democracia y justicia social ahogadas en un baño de sangre.

El fracaso de la institucionalidad internacional para frenar los flujos de las economías ilegales, el saqueo de las riquezas de Sudan a manos de gobiernos y transnacionales, la entrega permanente de armas a las estructuras mercenarias, con la complicidad de algunos y la permisividad de otros, han convertido el territorio en una de las más cruentas guerras de los últimos años. Se estima que para la fecha han sido asesinadas más de 150.000 personas, 12 millones son víctimas de desplazamiento forzado y casi 25 millones padecen la hambruna.



La Fuerza Conjunta, integrada por el movimiento Justicia e Igualdad y el Movimiento de Liberación de Sudan-Minawi, estructuras de milicia de defensa, han reiterado lealtad al ejército sudanés y se han comprometido con la defensa de la unidad nacional. Esta fuerza, ha convocado a la movilización del pueblo. Pero no cuentan aun con la fuerza suficiente para hacerle frente a un ejército proxy orquestado y sostenido por las potencias de la región y auspiciado por el occidente global.

Una solución genuina no llegará con nuevos acuerdos de reparto del poder entre generales o con la intervención humanitaria de las mismas potencias que alimentan el conflicto y que son las mismas que han intervenido en el “cese al fuego” en Palestina, pacificar para controlar.

La única esperanza reside en la reconstitución del poder popular desde abajo, en la capacidad del pueblo sudanes para organizarse más allá de divisiones étnicas y regionales, y para presentar un proyecto alternativo. Un proyecto que no luche por definir cuál facción burguesa debe controlar el Estado, sino por la socialización de los recursos de Sudán y la construcción de un Estado al servicio de las mayorías, liberado de las garras del capital extractivo y sus socios mercenarios. Mientras el capital global siga encontrando socios dispuestos a convertir su patria en un campo de batalla, la paz en Sudán será solo un interludio entre guerras.



“ Si la COP 30 prioriza la adaptación sobre la prevención, permanecerá en la memoria de la gente como la COP de la capitulación, es una forma de resignarse. Los gobernantes alegan que: dado que es imposible prescindir de los combustibles fósiles, el transporte globalizado de mercancías, la agricultura + industrial y otras actividades necesarias para el buen funcionamiento de la economía capitalista, solo nos queda la posibilidad de adaptarnos. Al mismo tiempo que la COP, se reunirá en Belém do Pará una Cumbre de los Pueblos, para protestar contra la inacción de los gobiernos, y afirmar la necesidad de romper con el sistema. Son sembradores de futuro, que rechazan la resignación y el conformismo. ”

Michael Löwy. COP 30 Brasil:
¿adaptación o prevención?
La Haine.org, 04-11-2025

